

# **BOLETIN DE NOTICIAS**

## **COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID**

**Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email: cmromero@nodo50.org**

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

**BOLETÍN NÚMERO: 154**

**FECHA: 15 de Octubre de 2012**

### **CENTROAMÉRICA**

#### **LA REMILITARIZACIÓN DE CENTROAMÉRICA PROVOCA MÁS MUERTES Y VIOLENCIA**

- ¡Lánzate al agua, no te detengas! - gritó Clara Wood Rivas a su hijo, Hasked, mientras las balas provenientes del helicóptero militar pasaban rozando su cuerpo e impactaban en el pequeño bote. Clara nadó con toda su fuerza hasta llegar a la orilla del río Patuca. Se volteó para buscar a su hijo en medio de la oscuridad. Lo llamó, pero no obtuvo respuesta.

Esa fue la última vez que Clara vio a su pequeño con vida. Hasked Brooks Wood tenía sólo 14 años y cayó bajo las ráfagas mortales disparadas por agentes del operativo conjunto del FAST (Equipo de Apoyo Consultivo en el Extranjero) de la DEA (Drug Enforcement Administration) y del Equipo de Respuesta Táctica de la Policía Nacional de Honduras.

Con él, perdieron la vida Emerson Martínez Henríquez (21 años), Juana Jackson Ambrocio (28 años) y Candelaria Pratt Nelson (48 años). Cuatro personas más fueron heridas de gravedad. Juana y Candelaria tenían cinco meses de embarazo.

De acuerdo con la investigación independiente realizada por el COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras) en la región de la Mosquitia, en Honduras, el pequeño bote en el que se transportaban 16 personas fue atacado por agentes hondureños y estadounidenses, creyendo que la embarcación estaba transportando droga descargada de una avioneta unas horas antes.

La investigación también mostró que, en ningún momento, hubo un intercambio de disparos, sino que el ataque provino desde los helicópteros y que continuó en tierra firme, "sometiendo la población civil a detenciones ilegales, amenazas de muerte, allanamientos, saqueo de bienes, trato crueles, inhumanos y degradantes", se lee en el informe.

La DEA negó cualquier tipo de participación de sus efectivos en el ataque. Igualmente, la embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske y el canciller hondureño Arturo Corrales, aseguraron que los efectivos que protagonizaron el operativo antidroga actuaron "en forma debida y en defensa propia", supuestamente para responder a disparos que provenían del pequeño bote.

"Reto a todas estas instituciones que actuaron en contra de la vida de las personas a que sean valientes. Que admitan que se equivocaron, que dispararon en contra de una población civil que no tiene vínculos con el narcotráfico. En vez de estar justificando la muerte de mujeres embarazadas y niños y estar lavando la sangre derramada, deberían pedirles perdón a los familiares de las víctimas", dijo a Opera Mundi, Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH.

Un mes después (25/6), agentes de la DEA mataron a tiros a un hombre que supuestamente participaba en la descarga de cocaína en la zona de Brus Laguna. A los pocos días, abatieron al piloto de una avioneta que se estrelló en la zona de Olancho, mientras trataba de evadir una operación antinarcóticos. La DEA reconoce que la cifra global de fallecidos durante estos operativos en territorio hondureño en los últimos dos meses asciende a ocho.

“La militarización siempre trae consigo muerte y graves violaciones a los derechos humanos. Lo que ha ocurrido en la Mosquitia hondureña es el resultado de una política de Estado que se está regando por toda la región, y que está encaminada a remilitarizar las sociedades”, apuntó Oliva.

### Militarización y violencia

El proceso de remilitarización que está viviendo Centroamérica en los últimos años, junto con el reposicionamiento estratégico-militar de Estados Unidos en la región en aras del combate al narcotráfico, ha generado fuertes debates y un malestar profundo en amplios sectores de la sociedad.

Según varias organizaciones, la puesta en práctica de programas como la CARSI (Iniciativa Regional de Seguridad para América Central) o la Iniciativa Mérida, así como la adopción de nuevas tácticas de guerra asimétrica e irregular, muy similares a las operaciones militares contrainsurgentes utilizadas por las tropas norteamericanas en varios rincones del mundo, serían pretextos que Estados Unidos usa para reafirmar su presencia en la región y preservar sus intereses. Como ya ocurrió durante los conflictos bélicos en las décadas pasadas, la población civil es la más afectada.

“Nuestro territorio se ha transformado en un centro de operaciones y de movimiento de capitales controlados por el crimen organizado, y los países del Sica (Sistema de Integración Centroamericana) apoyan la idea de reproducir la misma estrategia fracasada del combate al narcotráfico adoptada en Colombia y en México. En estos países, la salida militar no sólo no ha resuelto el problema, sino que lo ha profundizado”, manifestó Jorge Coronado, miembro de la Comisión Nacional de Enlace Costa Rica.

En Costa Rica el ejército fue abolido en 1948. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la “militarización” de la Policía y la compra de armamento y de unidades de despliegue rápido. Hasta se aplicó un nuevo impuesto a las sociedades anónimas para financiar el Ministerio de Seguridad Pública.

Coronado explicó que los efectivos policiales están siendo entrenados por el Mossad (Servicio de inteligencia y contraespionaje israelí), los carabineros chilenos y los cuerpos especiales del ejército colombiano y mexicano. Además, la DEA financia toda el área de seguridad pública y, junto con los asesores de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), participa en cada operativo. “Estamos al borde de una escalada de la militarización y la violencia, listos para abrir las compuertas para que se desate una guerra regional”, alertó el experto costarricense.

En el Triángulo Norte - Guatemala, Honduras y El Salvador - la DEA ha tomado el control de los operativos antinarcóticos. “Se hace acompañar por efectivos nacionales justo para darle una parvencia de legitimidad a las operaciones encubiertas. Nadie sabe de verdad lo que está pasando en estas zonas remotas del país”, manifestó el sociólogo guatemalteco Gustavo Porras Castejón.

Según él, el reposicionamiento militar de EUA en la región responde también a otros intereses, como, por ejemplo, la preocupación ante procesos de fortalecimiento y unidad de los países latinoamericanos. El proyecto de creación del CDS (Consejo de Defensa Sudamericano), un mecanismo de cooperación e integración militar impulsado por el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y asumido en 2008 por la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), sería, por ejemplo, uno de los elementos fundantes de la decisión de EUA de instalar 7 bases militares en Colombia, así como de reforzar sus operaciones navales en Panamá y lanzar una escalada militarista en Centroamérica.

“En definitiva, el combate al narcotráfico y al crimen organizado revela la hipocresía de EUA. Con su política de seguridad está facilitando nuevos procesos de militarización, desplaza a los cárteles hacia nuestros países y aleja los problemas de su territorio. Allá nadie está haciendo nada para combatir el consumo y la narcoactividad”, expresó María Silvia Guillén, ex comisionada de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y directora ejecutiva de la FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho).

En el caso de El Salvador, Guillén alertó sobre la militarización de las instituciones salvadoreñas. “Los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública. Ya tenemos a dos generales en retiro controlando el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil (PCN). Eso

violenta abiertamente la Constitución y los Acuerdos de Paz”, afirmó. La directora del FESPAD denunció incluso un repunte de las ejecuciones extrajudiciales en el país, con el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas. “Estamos volviendo al pasado”, dijo.

En Panamá, el ejército fue abolido después de la invasión de 1989 y las bases militares norteamericanas cerradas después de la entrega del Canal a las autoridades panameñas en el año 2000. Sin embargo, la presencia militar norteamericana no ha desaparecido. Antes bien está teniendo un repunte nunca antes visto.

En efecto, durante los últimos años, se ha registrado un incremento desmedido de los patrullajes aéreos y navales, las maniobras militares conjuntas (Panamax) y de la participación norteamericana en retenes en todo el país. Hasta se les ha otorgado jurisdicción a los guardacostas estadounidenses sobre buques con bandera panameñas.

“En los últimos tres años se han gastado 1500 millones de dólares en compra de armamento y el presupuesto de la Policía ha crecido en 550 millones. Además, se están creando 14 bases aeronavales que estarán orientadas a favorecer la política de seguridad impulsada por EUA”, dijo Silvestre Díaz, directivo nacional del FRENADSO (Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales).

Para muchos, la remilitarización de la región centroamericana es parte del gran negocio de la venta de armas. En 2011 las exportaciones de armas de EUA se han triplicado, alcanzando la cifra récord de 66.3 mil millones de dolares. Según Andrew Shapiro, secretario adjunto de Estado para Asuntos Políticos-Militares, el complejo militar-industrial estadounidense vendió un 78% de las armas del mundo. En junio de 2012, Estados Unidos ya había sobrepasado los 50 mil millones de dólares en venta de armas al extranjero.

#### El caso Nicaragua

Si bien Nicaragua ha mostrado, en los últimos años, un ligero aumento del presupuesto del Ejército y la Policía, y ha anunciado la puesta en operación de un nuevo batallón de tropas navales en la Costa Pacífica y un destacamento antidroga “de aguas interiores” de la Fuerza Naval en el río San Juan, en el extremo sureste del país, su participación a la lucha contra la narcoactividad y el crimen organizado sigue teniendo matices muy particulares.

“El combate a la droga hay que analizarlo según la forma en que cada país lo asume. El modelo nicaragüense es muy efectivo y no deja secuelas porque nuestro Ejército y nuestra Policía nacieron con la revolución sandinista, de las mismas entrañas del pueblo, y están profundamente enraizados en la comunidad y con su gente”, señaló a Opera Mundi el ex presidente del Parlamento Centroamericano y actual diputado sandinista, Jacinto Suarez.

En efecto, el modelo policial preventivo, proactivo y comunitario, junto con la efectividad del ejército nacional, no sólo está dando resultados muy concretos y representa un muro de contención contra la narcoactividad, sino que está siendo estudiado en toda América Latina.

Desde que el líder sandinista Daniel Ortega asumió la presidencia de Nicaragua, el nuevo gobierno tomó una posición muy clara sobre cuál debía ser el rol de EUA en el país, con respecto al combate al narcotráfico. “Luchar contra el narcotráfico no significa que ahora venga la DEA a querer establecerse aquí con sus bases, sus helicópteros, sus tropas. ¡Bajo ningún punto de vista! Por eso tenemos nuestro ejército nacional y nuestra policía que van a llevar en la práctica las operaciones contra el narcotráfico”, dijo el presidente Ortega a los pocos meses de haber asumido el mandato, en 2007.

“Con la DEA vamos a tener un trabajo de cooperación, pero con mucho cuidado. No podemos ser ciegos con la DEA, porque ellos tienen sus intereses que van mucho más allá de la lucha contra el narcotráfico. Por principio, no permitiremos que vayan metiendo sus tropas en nuestro territorio, porque ya se han descubierto cosas terribles en esas operaciones de la DEA”, sentenció Ortega.

El actual proceso que se está llevando a cabo en Nicaragua contra el empresario nicaragüense Henry Fariñas, el ex magistrado electoral Julio Cesar Osuna y otras 22 personas, así como la detención de los 18 falsos periodistas de la cadena mexicana Televisa, detenidos con más de nueve

millones de dólares en un puesto fronterizo con Honduras, es un ejemplo claro de la efectividad del modelo nicaragüense.

Fariñas es acusado de lavar más de nueve millones de dólares, de tener vínculos directos con los cárteles mexicanos y con el costarricense Alejandro Jiménez, alias "El Palidejo", principal sospechoso de ser el autor del atentado contra Fariñas, en el que perdió la vida el cantor y compositor argentino, Facundo Cabral.

### Saqueo de recursos

Sembrar incertidumbre y miedo en las poblaciones que se encuentran bajo fuego cruzado, desplazándolas de sus territorios para abrir paso a la explotación de valiosos recursos naturales del suelo y del subsuelo, es la acusación que varias organizaciones centroamericanas dirigen contra la estrategia del combate a la droga impulsada por EUA.

“Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos, junto con las oligarquías locales y los intereses transnacionales, están implementado una estrategia militarista para saquear nuestros recursos, apropiarse de nuestro territorio, cambiar nuestra cultura”, explicó Bertha Cáceres, coordinadora nacional del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).

“Los pueblos indígenas y negros estamos siendo criminalizados, estigmatizados y asesinados. De esa manera quieren desplazarnos de las zonas donde abundan los recursos naturales”, aseveró.

Para ella, la escalada militarista es parte de la dominación económica y política que sufre la región centroamericana. “La violencia es producto de la injusticia y la desigualdad social. No es más que un eje del sistema político-económico neoliberal impuesto por EUA a los países centroamericanos”, amplió.

Ethlen Erlinda Wood, coordinadora de la organización Ecos de la Mosquitia, expresa su profunda preocupación ante el reiterado hostigamiento de parte de los cuerpos especiales que operan en esta zona remota de Honduras. “Después de la masacre del 11 de mayo en Ahuas, las tropas hondureñas y los agentes norteamericanos siguen maltratando a los civiles y violentando los derechos del pueblo miskito. Todos nos hemos vuelto sospechosos de algo y es una carga psicológica muy pesada. Ya nadie se siente seguro y nuestra forma de vida está cambiando. Vamos a exigir el retiro inmediato de todas las bases militares ‘gringas’ del territorio miskito”, aseguró Wood.

Para los pueblos garífunas hondureños, el acaparamiento de sus tierras y la expulsión de sus territorios es el resultado de la voracidad de los poderes fácticos que controlan el país y del capital transnacional, para desarrollar en toda tranquilidad los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, implementar la explotación minera y extender el modelo de monocultivos a gran escala. “Y si los militares y los policías no son suficientes, hay un ejército de guardias de seguridad privada fuertemente armados y sin control, preparados para defender a sus patrones hasta las últimas consecuencias”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).

### Criminalización de la protesta

En este contexto de convulsión social, la lucha impulsada por varias organizaciones sociales y populares para contrarrestar la que consideran “una escalada militarista y saqueadora”, está siendo brutalmente criminalizada y reprimida.

Uno de los elementos usado para “apretar la tuerca” contra los movimientos sociales es el uso, cada vez más frecuente, de efectivos militares para cumplir con tareas de seguridad pública. En los países del Triángulo Norte, los Parlamentos han legislado para otorgar al ejército funciones que son propias de la policía.

“Hay una persecución sistemática en contra de los dirigentes comunitarios y los líderes de la protesta. Lo hemos visto en Santa Cruz Barilla, en San Juan Zacatepeque, en Nebaj y en todos los lugares donde la población se ha organizado para combatir los megaproyectos y la minería. Sólo por el hecho de estar protestando y de denunciar que nadie los está tomando en cuenta, el gobierno

acusa a los movimientos de delincuentes y terroristas”, dijo Juan Pablo Ozaeta, investigador del CER Ixim (Colectivo de Estudios Rurales) de Guatemala.

En esta lucha contra la explotación de recursos de parte de las grandes transnacionales norteamericanas y europeas ya han sido asesinadas varias personas. Además, fue denunciada la violación sistemática de los derechos humanos, como producto de la creciente militarización y el uso de nuevas técnicas de inteligencia militar para interceptar e identificar liderazgos comunitarios.

En Panamá, la aprobación de leyes antisociales ha generado una fuerte reacción de parte de la población. La represión policial contra los trabajadores bananeros en Bocas del Toro y el pueblo Ngöbe Buglé en Chiriquí, ha dejado un saldo de muertos y heridos. Por el uso ilegal de perdigones hay decenas de trabajadores del banano que han quedado ciegos.

“El pueblo ha salido a las calles de manera combativa reclamando sus derechos y la respuesta ha sido más represión. Todo eso en el marco de una política de seguridad para supuestamente combatir el narcotráfico, pero que al final es utilizada para reprimir la protesta social”, subrayó Silvestre Díaz.

Díaz explicó que la creación de unidades especiales relacionadas con el SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras) ha servido sobre todo para reprimir a la población. “Todos estos nos lleva a recuerdos muy tristes que pensábamos se habían quedado en el pasado”, dijo.

### Más Estado y menos militarización

Según amplios sectores de las sociedades centroamericanas no es con la militarización, ni con la violencia que se resuelve el grave problema de la narcoactividad y el crimen organizado. Durante el Foro “Fortalecimiento de las instituciones democrática”, Carmen Rosa Villa, representante regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pronunció en contra de que el Estado aplique “mano dura” para combatir la delincuencia. “El Estado debe recuperar su rol social, que ahora está en manos del crimen organizado, y los gobiernos deben aplicar políticas preventivas de los factores de riesgo de la violencia, atacando las raíces del problema como son la falta de educación y empleo”, dijo.

Según Francisco Dall’Anese, ex fiscal general de Costa Rica, la falta de oportunidades y el desinterés hacia una adecuada distribución de la riqueza han llevado la región a esta situación. “En estos espacios donde el Estado no brinda servicios, no resuelve los problemas de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, viene el crimen organizado y les da a los ciudadanos todo lo que necesitan. Esos grupos sociales terminan dando legitimidad a quienes les trajeron esperanza y comida”, explicó.

También para Jorge Coronado, resolver los problemas de pobreza y exclusión social es la única forma para atacar, desde sus raíces, las causas estructurales que hacen que cada vez más sectores se incorporen al narcotráfico y al crimen organizado. “El caldo de cultivo está en los grandes cordones de miseria que existen en los países centroamericanos. Como movimientos sociales tenemos el gran reto de profundizar nuestra análisis para contraponerla a la propuesta dominante de la militarización y la violencia”, manifestó Coronado.

Paralelamente a las problemáticas sociales, el combate a la corrupción y a la penetración de las instituciones, así como el fin de la impunidad parecen ser otras de las medidas urgentes y necesarias para luchar contra el crimen. “Necesitamos fortalecer la institucionalidad del Estado y revisar el funcionamiento de las instituciones, de tal manera que tengamos claro al servicio de quiénes están, es decir si de la criminalidad organizada o de los intereses nacionales”, sugirió María Silvia Guillén.

La ex comisionada de la CIDH explicó que los gobiernos deben llenarse de soberanía. “En vez de estarles cuidando las fronteras a los Estados Unidos debemos de cuidar los intereses de cada uno de nuestros países”, sentenció.

Para la dirigente garífuna Miriam Miranda, hay una política hipócrita contra el narcotráfico. “El crimen organizado ha penetrado las instituciones. Todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Prefieren criminalizar a los pueblos, hostigarnos, diezmarlos, preparando las condiciones para abrir las puertas al capital transnacional”.

Además, son muchos los que opinan que el verdadero problema no radica en Centroamérica, sino en el Norte. "Por mucha voluntad y capacidad que se tenga, el problema no lo vamos a resolver nosotros. Los cárteles no terminan al llegar a la frontera con EUA, porque allá hay quien recibe, transporta y distribuye la droga. Allá está la demanda y los consumidores. ¿Qué está haciendo EUA para desarticular estos grupos y combatir el consumo?", se preguntó Jacinto Suárez.

Una lucha que, definitivamente, debe ser consensuada y tiene que involucrar a la población. "Hay que involucrar a las comunidades, buscar estrategias junto con el pueblo, investigar a fondo los grupos económicos y de poder que están coludidos con este fenómeno. Si no se pone un alto a la impunidad, si no se ataca la pobreza y la miseria, si no se cambia el modelo económico fracasado que nos ha llevado hasta ese punto, no vamos a resolver nunca este problema", concluyó la dirigente indígena Bertha Cáceres.

Fuente: [Giorgio Trucchi](#). Opera Mundi

## **COLOMBIA**

### **CONVERSACIONES CON IVÁN CEPEDA CASTRO, REPRESENTANTE DE LA OPOSICIÓN**

"Estaríamos ante el resurgimiento de una patria donde la violencia no sea el hábitat normal"

Poner fin a la confrontación armada y relegar el ejercicio de la violencia, de la amenaza, del atentado, al pasado, constituye un acontecimiento histórico para nuestra nación. Un sueño que no cabe en corazones obligados a callar ante la ignominia. Un ideal de convivencia que permitiría consagrar las energías colectivas a curar tantos estragos, tantas situaciones sociales catastróficas que matan o laceran a diario cuerpos y espíritus en nuestro país. Este enfoque mueve el compromiso y la memoria del representante de la oposición Iván Cepeda Castro.

En nuestra nación, la paz ha sido un sueño que, a fuerza de atrocidades, no volvimos a abrigar. Nos acostumbramos a sobrevivir en medio del horror: pan nuestro de cada día. La degradación de la confrontación armada fue de la mano con la consolidación de una narcoeconomía ligada a la guerra contrainsurgente e insurgente, en la que el gobierno de los Estados Unidos participó decisivamente. El gobierno anterior catapultó los puntos de fusión entre el Estado, el paramilitarismo y el narcotráfico.

Sin fusionarse en una totalidad, las reservas éticas del país emergieron frente al criminal designio. Los movimientos sociales hicieron sentir su voz. La veta del decoro de la nación se opuso al proceso de legitimación institucional del narcoparamilitarismo, con sus filones de periodistas, jueces, defensores de derechos humanos, colectivos de abogados, sectores de los trabajadores, campesinos, estudiantes, maestros, mujeres, artistas, y de pueblos originarios y afros, franjas de partidos políticos.

La Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno no había logrado cooptar, fue perseguida desde el DAS a partir de 2007 por emitir sentencias en Derecho, contrarias al control absoluto de la institucionalidad. Como respuesta, no tardó la persecución a los magistrados ponentes por la red de intereses que convergían en un régimen con pocos precedentes en la región: narcoestado colonial.

En el escenario dantesco heredado, que consume las energías de la nación e invaluables recursos sacrificados en una guerra con sus altares en las fuentes de utilidades, irrumpió la noticia en los últimos días del mes de agosto, del "Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera", suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) con base en las conversaciones exploratorias que sostienen en La Habana desde febrero del 2012.

Con el aire fresco de esta noticia, acudimos el martes 11 de septiembre al cuarto piso del Congreso Nacional para escuchar a Iván Cepeda Castro, defensor de los derechos humanos, representante a la Cámara, vocero del Movice, una voz que sabe del conflicto, de la muerte y las penas insondables, y sabe también de la vida que reverbera en nuestro territorio y nuestras gentes; una voz con la capacidad de examinar diversas facetas de un proceso de paz que instalará su mesa de acuerdos en Oslo en los primeros días de octubre.

Al momento de ingresar a su oficina, el ambiente tiene tensión. Vía twitter llegó un informe que revela una orden del jefe de seguridad de Tomás Uribe, mayor Herrera Ariza: interceptar todas las comunicaciones de Cepeda y hacerle un seguimiento durante las 24 horas. El representante marca en un gesto el esfuerzo para concentrarse en la conversación, comunica por vía telefónica a un asesor la información que ha recibido, y de paso, con un humor que suspende el aliento, se lo dice al Mayor. A renglón seguido, Iván aleja de su mente el riesgo anunciado, pero algunas líneas de su rostro revelan las graves responsabilidades que pesan sobre sus hombros en este tiempo decisivo. A la pregunta ¿qué factores pueden, en este momento, potenciar la esperanza en el fin de la confrontación armada?, no hay un silencio. "Hay que partir de la conciencia sobre lo que significan más de 50 años de conflicto y de entender que el proceso en marcha busca una respuesta compleja a ese acumulado de violencia, como también que en la nación hay un gran cansancio de la guerra; madura, avanza una conciencia colectiva que siente y comprende la necesidad de conquistar la paz. Hay sectores de la élite que ven en el conflicto armado una barrera objetiva, un gran obstáculo para sus intereses económicos".

El contenido de las declaraciones del gobierno nacional y de las farc, y la precisión en los temas de la agenda que esta vez están sobre la Mesa para explorar los acuerdos de fondo y las condiciones para hacerlos definitivos, desatan la contenida esperanza –después de más de cinco décadas de salvaje confrontación y fallidos procesos por ponerle fin– de cerrar, esta vez sí, la página de barbarie que tanta sangre, sufrimiento y miseria marcan a nuestra nación.

Antes, sin dar espacio para otra pregunta con respecto a los intereses del poder, Iván reflexiona sobre la Colombia percibida como una nación no competitiva en los foros internacionales, que puede no importar al sector que ascendió al poder con Álvaro Uribe, pero sí preocupa al entorno del presidente Santos. Además, las transformaciones en otros países del área, con procesos democráticos y de participación social, hacen aparecer a Colombia como una excepción con peso en el retardo de los procesos de integración regional que la situación mundial exige.

Los últimos ministros de Defensa subrayan una y otra vez "el comienzo del fin", y ninguno de quienes aspiran a la paz tienen duda de que las farc han sufrido golpes muy fuertes. Iván Cepeda mira dentro del Estado, las instituciones, la sociedad y la insurgencia. "En la mesa de acuerdos, las partes no llegan derrotadas pero sí debilitadas, cada una desde su perspectiva. El Gobierno y el Estado han sufrido un desgaste muy fuerte que no obedece sólo a la confrontación armada con la insurgencia sino también a los métodos que se han usado. El Estado decidió en estos años de guerra sacrificar su legitimidad, sacrificar la Constitución Nacional, para emplear métodos criminales que han degradado cada vez más la confrontación y que le han causado un profundo daño a la legitimidad de las instituciones; todos los poderes públicos han sufrido sus propios colapsos, sus propias rupturas. El Congreso, para no ir muy lejos, ha sufrido escándalos gigantescos y el poder judicial otro tanto, y algo similar podemos decir del ejercicio presidencial. Este daño crea la necesidad de sentarse a pactar las condiciones para que desaparezca el conflicto, por lo menos en su forma armada, creando unas condiciones que hagan innecesario e incluso imposible el uso de las armas".

### **Las patas de la Mesa**

Con diferentes tonos, las partes han coincidido en la voluntad de lograr un acuerdo para terminar el conflicto armado, que tiene características diferentes de la agenda de otros acuerdos. Iván Cepeda reflexionó sobre esas diferencias. "En el ayer cercano hubo diálogos exploratorios, incluso pactos, pero esta es la primera vez que tenemos una agenda definida, pactada. En el Caguán llegaron a tomar como referencia un conjunto de temas, pero nunca a decir en consenso 'estos son los puntos sobre los cuales vamos a pactar'. El acuerdo que se acaba de firmar se logró en medio de confrontaciones muy candentes: del lado de la guerrilla –estando en esas conversaciones–; contaron las muertes de su comandante y de su líder militar, Alfonso Cano y Jorge Briceño. Del lado del Estado, éste no ha podido evitar los recios ataques de la guerrilla en muchas partes. Y pese a todo, hoy llegamos a este punto. Es más, la guerrilla ha dicho que no se levantará de la mesa hasta lograr un acuerdo, y algo similar dijo el Gobierno". Una valoración, por supuesto, con sentido positivo del nuevo escenario.

## Tierra y uso del poder

En el viento está la pregunta ¿Cuáles son los temas decisivos e imprescindibles para lograr acuerdos que pongan fin a la confrontación armada? En la voz pausada de Iván Cepeda se han fusionado los timbres de una conjugación de consecuencias del conflicto. Hijo de un espíritu artístico y severo militante comunista andino; hijo de una dulce y extraordinaria organizadora social y líder popular de la costa atlántica; hijo de un hombre íntegro que resistió el calvario del exterminio sistemático de sus amigos y compañeros, y años de veinte amenazas cobardes cada día, hasta ser acribillado por el terror de Estado; hijo de un país que ha visto bajar la muerte y prevalecer la impunidad, en calles y veredas, con protección del poder: "Hay dos grandes asuntos al final de este camino: dos aspectos estructurales que son causa de la confrontación: La reforma del mundo rural, uno, y las libertades y garantías del ejercicio de la oposición política y social, otro. Ningún proceso de paz ha producido transformaciones de carácter socioeconómico, estructurales. En cambio, sí se ven transformaciones políticas que les permitieron a las fuerzas que antes estaban en la insurgencia llegar a fuerzas gobernantes. Sudáfrica, Norte de Irlanda, por ejemplo. Espero que en los acuerdos de paz que puedan darse se tomen decisiones que trasciendan el asunto de las libertades políticas, y que repercutan en la transformación del mundo rural, de su pobreza, y de ese inmenso desequilibrio que hay entre el campo y la ciudad en Colombia". Pero, ¿qué sectores resultarán afectados para ese país distinto?

"La Ley de Tierras no ha podido avanzar porque no basta una ley. No basta la creación de unos tribunales. No basta la decisión que toma una institución como el Incoder. Y no basta porque, en las zonas donde se ha presentado el despojo, el Estado está puesto en función de una máquina criminal y de acumulación de riqueza. Por eso, si la reforma agraria no toma en consideración el poder local, será letra muerta. Es evidente que hacer una reforma agraria pasa por enfrentar poderes locales entroncados con los terratenientes, ganaderos y agroindustriales más improductivos. Si no los enfrenta, la reforma tendrá alcances muy limitados, como los tiene la propia restitución. La restitución es apenas un tímido ejercicio para rasguñar ese poder que tiene siglos".

Y continúa con gran precisión: "Muchas zonas rurales, periféricas, requieren una revolución democrática. Y mucho más: el marco general del país requiere democratizar el poder, hacer que las elecciones sean transparentes; que las personas que vayan a gobernar en los municipios, en las ciudades intermedias, no sean asesinadas. Que las organizaciones sociales puedan ejercer libremente su trabajo; que quienes son castas familiares que gobiernan en esos lugares con métodos criminales, desde tiempos inmemoriales, sean reemplazados y judicializados, que la contratación del Estado no sea un botín. Por ejemplo, siete gobernaciones de la costa atlántica siguen contratando con la señora Enilce López. Lo relacionado con el funcionamiento de los juegos de azar en la Costa está en manos del narcotráfico y el paramilitarismo", denuncia.

En su gravedad y largo tiempo, el conflicto marca otros temas aledaños, que el Representante maneja y domina en sus intervenciones no escuchadas, y menos meditadas, por muchos de los congresistas: "El narcotráfico, el poder político en las regiones, y la reparación política del exterminio de la UP y los atentados y crímenes contra otras organizaciones. Son temas que implican mutuas concesiones, porque de eso se trata una negociación. La historia del país muestra el trasfondo de un sector muy poderoso que es contrario a cualquier cambio y cualquiera pérdida de privilegios que han ganado por medio del ejercicio más despiadado de la violencia y la asociación con el crimen organizado. Es significativo que en la mesa de negociación el Gobierno no llamara, por lo menos hasta ahora, a ese sector, el más furioso opositor a un proceso de solución política. Que ese sector habla por boca del ex presidente Álvaro Uribe no es un secreto. En ese conjunto radica una parte fundamental del problema, porque al mismo tiempo que ese sector ha hecho del ejercicio del poder una práctica autoritaria, con utilización de la fuerza pública para reprimir y silenciar violentamente a opositores, esa criminalidad estatal tiene fusión con la criminalidad organizada, característica de la violencia estatal en Colombia".

La elección a la Cámara del representante Cepeda significó para muchos el ascenso del decoro, la memoria y el compromiso con la verdad de las víctimas del poder. Su campaña y sus intervenciones día tras día, que señalan a buena parte del poder local, llaman a pensar sobre la bárbara división social que produjeron la Conquista y la Colonia. Una casta y un sector racial que se atribuyeron



todos los privilegios, en el proceso de usurpación titulada de la tierra, bajo la consideración de la amplia mayoría nativa, negra y mestiza como una raza inferior, sin derechos. Un orden injusto que nutrió una prolongada confrontación que devino más compleja al comenzar el siglo XX por los intereses del hiperpoder global y su necesidad de controlar territorios y población. Hay quienes insisten en que no es posible comprender nuestro pasado sin saber cuál es el punto en el que se cristalizó el pacto entre sectores del Estado y la criminalidad organizada.

Algunos investigadores señalan que durante el gobierno de Ronald Reagan, 1981 marcó el momento de la diplomacia y los pactos que concedieron licencia de funcionamiento a sectores del narcotráfico dispuestos a participar en la guerra sucia, no sólo contra las guerrillas sino asimismo contra cualquiera de las expresiones contrarias al control global del territorio.

Iván Cepeda tiene una reflexión y un conocimiento propios frente al tema, en los días que corren: "Ha habido muchos momentos, pero hay uno en particular importante. Así dejamos dicho en el debate de control político sobre el general Mauricio Santoyo y su historia. El punto en el que, por ejemplo, la policía nacional sacrificó su legitimidad como institución, cuando el pacto hecho para perseguir y dar muerte a Pablo Escobar. En la decisión de enfrentar a Escobar con los mismos métodos que él utilizaba, y por tanto aliarse con el cartel de Cali, con la casa Castaño, con la banda de La Terraza, con el paramilitarismo del Magdalena Medio. Ese fue un pacto en el cual facciones del Estado operaban de manera encubierta con el paramilitarismo y con el narcotráfico, y las consecuencias de ese pacto vinimos a verlas en el año 2002, cuando se produjo el ascenso, la entronización en el poder, de ese sector".

### **Pacto mafioso y genocidio**

A nuestra nación, desde hace décadas, le birlan la soberanía y la verdad sobre los intereses que hay detrás de las decisiones de los intereses foráneos impuestos sobre su destino. Así sucedió en 1945, cuando, decretado el genocidio del movimiento gaitanista, se ordenó el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Después, en 1985, cuando emergió la Unión Patriótica, una alianza siniestra entre el fundamentalismo anticomunista, los intereses del capitalismo atlántico y sectores del narcotráfico habían decretado de antemano el genocidio contra esta organización que buscaba hacer política de avanzada. Hemos sido objeto de campañas sistemáticas contratadas con agencias internacionales para manipular el imaginario colectivo y tender un manto de confusión que evite conocer la red de intereses que han hecho del Estado un instrumento de control del territorio y la población.

Este momento inaugural de un nuevo proceso de paz saca a debate, con un mayor tamaño, no completo, el entramado de lo que acontece en Colombia. La verdad oculta no puede brillar en medio de la violencia, y el representante Cepeda recalca que el momento real de la verdad se dará una vez que termine el conflicto y no pese sobre los actores, los testigos, las víctimas, la espada de Damocles del propio uso de la violencia. Cree que una vez que fructifique un pacto de paz deberemos entrar en un proceso de verdadero esclarecimiento y responsabilidad de todos los hechos que acontecieron. Considera el congresista que es comprensible, aunque no justificable, que en medio de una negociación las partes sigan sosteniendo tesis y discursos que son propios del conflicto, negando su responsabilidad sobre diferentes hechos e intentando convencer a la opinión de que no se ha incurrido en ciertas prácticas. Y que eso es válido tanto para la guerrilla como para el Gobierno.

Es el comienzo de la Mesa, sin el despertar y el clamor de todos, ni la presencia del conjunto y la diversidad de las dinámicas sociales [...] Con sentimiento, sin la entonación artificial de los oradores de carrera, el vocero de Movice continúa señalando que: "llegará el momento en el que la sociedad exigirá la verdad porque el Gobierno, por su lado, pide que la guerrilla debe dejar de reclutar niños, de secuestrar, pero no reconoce su responsabilidad [...] en los desaparecidos, en las amenazas y los 'falsos positivos'. Impugna a la guerrilla por incurrir en narcotráfico, pero acabamos de ver hace pocas semanas que el Jefe de Seguridad del Palacio de Nariño fue extraditado como un hombre a sueldo del paramilitarismo y del narcotráfico, en el Palacio Presidencial. Quienes han hecho uso de esos métodos tendrán que reconocerlo. Si llegamos a un proceso de paz en el cual el debate público sustituya a la confrontación armada, la gente no va a creer ni a legitimar tesis, argumentos, justificaciones, que de suyo son inadmisibles".

## **Paz y medios de comunicación**

Las noticias de abrir y los titulares no cambian su sentido. Ofrecen unas visiones recortadas de la confrontación, de sus orígenes, de sus actores, y ahora, con el proceso de paz en marcha, insisten en divulgar una mirada que no recoge la complejidad del proceso, las diferentes ópticas que convergen en la mesa de acuerdos, la gravedad de la crisis social. Buscan un efecto, y aunque la participación ciudadana no depende de los medios de comunicación, sí es desviada, disminuida en su presión por el tipo de trabajo que desarrollan. Desde nuestro lugar alternativo, independiente, nos inquieta el papel de los medios de comunicación y su responsabilidad frente al proceso de paz y al escenario de la participación ciudadana. Al respecto, Iván Cepeda considera que en estos procesos se va llegando a una madurez, tanto de quienes negocian como de quienes están realizando procesos sociales concomitantes a esa negociación.

Cree y quiere pensar, que independiente de su signo ideológico, los medios han aprendido a establecer el equilibrio necesario entre el deber de informar y el deber de respetar los procedimientos de una negociación de paz. "Yo esperaré eso".

Ante nuestro gesto dubitativo, Iván con la velocidad mental y el aplomo quindiano que casi estamos seguros que heredó de su padre, Manuel Cepeda Vargas, director del periódico Voz, secretario de organización de su partido, periodista, congresista, puntualiza que ciertos comunicadores actúan bajo el impulso de su interés particular. "Me refiero concretamente a Francisco Santos, que intenta justificar la filtración espectacular de la agenda de negociación como si se tratara simplemente de un asunto de audacia periodística, cuando constituyó una forma de entorpecer o torpedear el proceso en su embrión". En la pausa de su hablar, pensamos que hoy en los corrillos está claro que afectó el tiempo, para alcanzar la conformidad y la vinculación del eln.

El representante Cepeda prosigue: "Todos debemos prepararnos para explicar, exigir incluso, que las negociaciones tomen en cuenta las voces, los requerimientos que durante años han hecho los movimientos sociales sobre la agenda temática. Para eso hay que crear mecanismos. En lo concerniente a la Cámara de Representantes y su Comisión de Paz y la Comisión de Paz del Senado, ya estamos en el trayecto de convocar siete grandes audiencias regionales, para conocer las ideas de la gente y canalizar esas opiniones mediante los mecanismos que cree la propia Mesa. Y advierte: Vendrá otro momento substancial en la hipótesis de llegar a un acuerdo de paz: la gran participación ciudadana deberá en ese momento tomar protagonismo. Por ahora, éste se encuentra en cabeza de quienes negocian. Pero luego, en la aplicación de los acuerdos posibles, deberá ser la movilización social, popular, ciudadana, la instancia que garantice los acuerdos, y la que activamente construya esas nuevas condiciones".

## **Crímenes de lesa humanidad y la justicia transicional**

"Dada una negociación, el asunto adquiere un carácter bilateral". Cepeda, conocedor del marco de los Protocolos I y II del Derecho Internacional Humanitario, y asistente a visitas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos autorizó a los jefes paramilitares con condena allá, hace notar que la cuestión no es solamente si la guerrilla, sus comandantes, sus miembros, podrán ser o no objeto de justicia transicional sino también los agentes del Estado. Aún más, señala: los empresarios y los políticos que actuaron de la mano de paramilitares, ordenando y utilizando en múltiples atentados y de manera criminal la fuerza pública.

Sin negar que exista un marco jurídico internacional que determina estos asuntos, asume que sería ingenuo hacer abstracción de tales disposiciones y que esa institucionalidad internacional construida, con sus defectos y sus unilateralidades, implica que los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los actos de genocidio, no pueden ser objeto de medidas de indulto, amnistía e impunidad. Una normativa por la cual "hay que construir un modelo que, satisfaciendo las exigencias de esos estándares, permita llegar a la paz".

Cepeda vislumbra por primera vez en la historia contemporánea "un nuevo poder en Colombia, distinto, un poder alternativo, que sí puede producir transformaciones estructurales; una posibilidad cierta de un escenario para el ejercicio de la política con libertad y sin discriminación ni exclusión por las ideas, por el origen de las cunas, la pobreza y la forma de pensar. Aquí no se trata solamente del problema de las armas sino igualmente de cómo se domina, se sustraen y se manipulan el sistema

electoral, los medios, el producto nacional y las riquezas. Si en Colombia crece el acuerdo de paz, aunque no van a desaparecer los conflictos sociales ni me hago la ilusión de que de manera mágica llegue la solución de los graves problemas que tiene nuestra sociedad, estaríamos ante el resurgimiento de nuestra sociedad en una patria donde la violencia, en su formas más feroces, no sean el hábitat normal de la nación".

## **GUATEMALA**

### **EJÉRCITO MASACRA A INDÍGENAS EN TOTONICAPÁN**

Como hace 520 años atrás, se sigue masacrando a las poblaciones indígenas en Guatemala en defensa de intereses foráneos. Los Acuerdos de Paz, firmados hace 16 años atrás, entre el Estado-Ejército y la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG), sólo sirvieron para desmovilizar al pueblo guatemalteco y abrir las compuertas del país al sistema neoliberal brutal que no admite oposición alguna. Se cosecharon los dólares y euros de la cooperación internacional con el rótulo "para la pacificación", y se prometió derechos "culturales" a los pueblos indígenas para tratarlos como piezas de museo. Y, cuando las y los indígenas organizados se movilizan reclamando sus derechos colectivos, el Estado los mata a bala sin mediar explicación.

Hace unos meses atrás, indígenas mayas de Santa Cruz de Barrillas, Huehuetenango, fueron brutalmente reprimidos (con dos asesinatos de por medio) por la guardia privada de una empresa de hidroeléctrica española y el Ejército de Guatemala. En aquel entonces, para escarmentar a los indígenas sublevados en contra de la empresa española, el democrático Gobierno de Otto Pérez dictó un Estado de sitio.

Ayer, jueves 04 de octubre, tuvimos que ir a conciliar el sueño con un nudo en la garganta porque nuevamente el Ejército salió en defensa de otra empresa transnacional, esta vez Energuate (empresa inglesa de energía eléctrica) y reprimió una pacífica movilización indígena matando a 7 indígenas, e hiriendo a otros 41 (según datos extraoficiales). Esta masacre ocurrió mientras el democrático Gobierno de Otto Pérez dialogaba con la dirigencia de la Alcaldía Indígena de los 48 cantones, de Totonicapán, sobre sus demandas/propuestas de la nacionalización de la energía eléctrica, reformas a la Constitución Política y la problemática de la formación de maestros.

#### ¿Por qué el Estado asesina a indígenas en Guatemala?

Casi al mismo tiempo que finalizaba el proceso de desarme de las guerrillas en el país, desde la Guatemala profunda emergió una fuerza social sin precedentes del pueblo maya organizado, demandando sus derechos. Esta histórica fuerza social maya ha sido neutralizada por el Estado ladinocéntrico y neoliberal convirtiendo a la dirigencia indígena en funcionarios públicos sin decisión, ni impacto en el Estado. Así, el Estado se mostró al mundo maquillada de "multicultural y pluriétnica", y desmovilizó a las y los indígenas a nivel nacional.

Ante esta estrategia, el movimiento social maya de alcance nacional se recluyó a los niveles locales. Y desde allí, ya sin la presencia de "dirigentes" indígenas como Dña. Rigoberta Menchú, o el partido político indígena Winaq, desafían al Estado excluyente y empobrecedor resistiéndose a ser expulsados o contaminados por proyectos de hidroeléctrica, minería, monocultivos, etc. Los partidos políticos de la derecha, con la finalidad de someter al movimiento indígena, actualmente edulcoran el Congreso Nacional con 20 diputados "indígenas mayas" y 1 de Winaq (en total representan el 13% del Congreso), pero éstos tramitadores serviles que concesionan el país a las transnacionales no tienen legitimidad social en las bases, y éstas se insubordinan aglutinados alrededor de demandas comunes.

Otra razón para matar y escarmentar indígenas movilizados es Guatemala es prevenir al país de "malos ejemplos". El Gobierno de Otto Pérez y la oligarquía criolla saben que las organizaciones indígenas locales que no pudieron desarticularlas en casi dos décadas de "pacificación", se constituyen, en este momento, en un peligro para el Estado etnofágico y oligárquico. Humanamente es casi imposible contener el viento de la transición hacia estados plurinacionales que sopla desde el Sur, sobre todo, desde Bolivia y Ecuador, impulsado por pueblos indígenas. Habrá que conocer la

contrapropuesta que tiene el pueblo maya de los 48 cantones de Totonicapán a la multimillonaria propuesta de reforma constitucional que Otto Pérez impulsa actualmente.

### ¿Importan los acuerdos y convenios internacionales para el gobierno de Guatemala?

Aunque según los datos oficiales del Estado ladinizante, el porcentaje de la población indígena jamás supera el 30% del total de la población del país. Investigadores indígenas independientes, y la realidad social policromática evidencian que alrededor del 60% de la población del país es indígena maya. Más sin embargo, ni tan siquiera está reconocido en la Constitución Política los idiomas nativos como idiomas oficiales. La hipócrita declaración de “pluriétnico y multicultural” (para encubrir el monoculturalismo y negar la posibilidad de la interculturalidad) no es constitucional en Guatemala.

En 1995, luego de más de una década de negociaciones, el Gobierno-Ejército y URNG, firmaron el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce derechos culturales a indígenas, pero de los 52 compromisos para implementar aquel acuerdo, sólo se cumplieron alrededor de 7 (COJTÍ, 2010).

En 1996 el Estado de Guatemala ratificó el Convenio 169° de la OIT. Gracias a los contenidos de este Convenio organizaciones indígenas locales resisten a las mineras, petroleras, palmeras, etc., mediante consultas populares. Pero el gobierno los manda a matar como si el indígena organizado y consciente fuese enemigo del Estado. En 2007, Guatemala, junto a 133 países, aprobó la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero eso fue sólo para arrancar aplausos en las cumbres internacionales, aparentar de pluralista y multicultural y cosechar el dinero de la cooperación internacional. Existen muchos otros convenios y compromisos internacionales sobre derechos humanos incumplidos por el Estado de Guatemala.

Los pueblos indígenas, en el marco de los contenidos del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas, presentaron una propuesta de proyecto de Ley Marco sobre Pueblos Indígenas, pero aquella propuesta ha sido archivada porque los tramitadores de las leyes obedecen a los intereses de los patrones y de las empresas multinacionales.

En estas condiciones, al pueblo indígena organizado no le queda más que las calles para incorporar sus demandas históricamente postergadas en la agenda nacional. Masacrando indígenas el Estado de Guatemala ya no podrá apagar el insipiente sueño de la plurinacionalidad e interculturalidad emergente desde los sectores excluidos del país. El siglo XXI es y será la afirmación de la reconstitución de las identidades y autodeterminaciones de los pueblos indígenas subyugados por el fracasado modelo monocultural del Estado nación. La población y la élite privilegiada de Guatemala deben entender que este pueblo no nació para pasar a la historia de la humanidad repudiada por la tozudez y obstinación mental y moral de sus (des)gobernantes.

Muchos países del mundo, ahora en la oscuridad de la crisis del modelo del sistema-mundo-occidental, quisieran tener la mega diversidad de vidas de Guatemala, para aprender de la diferencia fecunda. Pero no la tienen. Nosotros/as, sí. Optimicemos esta fértil diferencia providencial y atrevámonos a ingresar al siglo XXI con nuestra propia luz intercultural.

Fuente: [Ollantay Itzamná. Rebelión](#)

## HAITÍ

### **EL PODER DE LA CALLE**

La oposición haitiana y el gobierno buscan presentar pruebas de adhesión popular. La escalada del costo de la vida y las irrefutables acusaciones de corrupción suman opositores en todas las clases sociales.

Desde mediados de septiembre, cientos -y luego miles- de manifestantes han salido a las calles de Cabo Haitiano, la ciudad más importante del norte del país, y en Cayes, una localidad ubicada en el sur. Al principio protestaban por el alza del precio de los alimentos. Luego, pidieron frenar la corrupción en un ambiente tenso por las acusaciones de malversación de fondos que involucran a Sophia y Olivier Martelly, la esposa y el hijo del presidente Michel Martelly, quienes dirigen dos

comisiones presidenciales con poderes ilimitados. En la marcha del 27 de septiembre la multitud gritó hasta el cansancio: ¡Fuera Martelly!

El domingo 30 de septiembre, en Puerto Príncipe, miles de manifestantes que sacudían tarjetas rojas, pidieron la expulsión del Presidente por incumplir sus promesas de campaña. La manifestación fue convocada por Lavalás y otros grupos de oposición, para conmemorar el 21 aniversario del golpe de Estado que derrocó a Jean-Bertrand Aristide, y recorrió las calles de algunos barrios populares de la capital. La marcha se detuvo unas cuadras antes de llegar al Palacio Presidencial debido a la presencia de la policía haitiana y de [las fuerzas de las Naciones Unidas](#) (MINUSTHA) que ocupan Haití desde esa intervención militar realizada por Estados Unidos, Canadá, Francia y Chile para derrocar a Aristide.

Diputados, exsenadores y exministros participaron en la manifestación del domingo. Las agencias de prensa internacionales informaron que algunos participantes gritaban: “Nunca más un golpe de Estado. Queremos un Estado democrático en Haití”, y señalaban que “los autores del golpe de Estado están ahora en el poder”.

Aunque recibieron menos publicidad, este mes, también, estudiantes de la universidad de Gonaïves salieron a la calle para demandar a la administración Michel Martelly/Laurent Lamothe la entrega de diplomas, cambios en la organización del centro de estudios y la construcción de una nueva sede para la universidad pública.

La respuesta oficial

El lunes, 1 de octubre, Michel Martelly regresó a Haití luego de asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Le esperaban, según algunos medios, cientos y según otros, miles de personas. Rodeado por el Primer Ministro Lamothe y otros colaboradores, el jefe de Estado caminó desde el aeropuerto hasta el Palacio Nacional, seguido por la multitud. Allí, visiblemente fatigado, declaró que esta modalidad de desplazamiento no era “una manifestación política” (en respuesta a la movilización del día anterior) sino una actividad deportiva. “Quiero caminar para acercarme a la población, tranquilizar a todo el mundo y anunciar que el año escolar ha comenzado”.

El Presidente declaró que lucharía contra el alto costo de la vida, pero con un tono crítico comentó que su intención no era “explotar este tema con fines políticos”. En la manifestación participaron bandas musicales y animadores que gritaban: “Martelly, el país es suyo, haga lo que quiera” y “Martelly, por 5 años”.

Unas horas después de terminada la marcha oficialista, la policía lanzó gases lacrimógenos y disparos al aire para dispersar a los mismos manifestantes que habían acompañado al presidente. En inmediaciones del Palacio Nacional, una centena de hombres se reunieron para pedir a gritos al mandatario el pago de la gratificación prometida después de “haber trabajado duramente”, señaló la emisora [Radio Kiskeya](#).

Enojados, aseguraron que se habían movilizad o luego de que se les asegurara que se les entregaría dinero por su participación. Declararon que unos pocos habían recibido cerca de 25 dólares. La misma emisora señaló que uno de los participantes preguntó por qué un dirigente que se dice popular tiene que pagar a las personas que participan en sus manifestaciones.

Radio Kiskeya comprobó que hubo “transporte gratuito en autobuses hacia el aeropuerto” para empleados del Servicio Metropolitano de Colecta de Residuos Sólidos y desempleados, en su mayoría jóvenes.

En la manifestación pro Martelly también hubo un muerto. El policía Frandieu Pierre-Louis, de 33 años, oficialmente sufrió un ataque cardíaco debido al calor y al esfuerzo realizado durante el largo recorrido a pie del aeropuerto al Palacio Nacional. Sin embargo, la familia del policía sostiene que una herida le causó la muerte. [Alterpresse](#) señala que uno de sus tíos declaró que “murió a causa de la megalomanía y la locura de un jefe de Estado que busca desesperadamente probar una popularidad que solo existe en su imaginación”.

Algunos [medios](#) señalan que el actual estado de ebullición en Haití puede convertirse en una revuelta popular y recomiendan “acallar las contradicciones secundarias con el movimiento *lavalasse* y privilegiar la contradicción principal con el poder absolutista”. Lo cierto es

que el gobierno de Martelly/Lamothe ha dado muestras de una total falta de capacidad para atender los problemas del país, lo que nutre las protestas que convocan los partidos de oposición.

Para finalizar, una muestra del “estilo de gobierno” del binomio Martelly/Lamothe: mientras las asociaciones de consumidores de Estados Unidos protestan por los niveles de arsénico inorgánico encontrado en el arroz cultivado en ese país, Haití es el tercer importador mundial de este producto y el primer importador por número de habitantes. Como solución a la subida del costo de los alimentos, el gobierno haitiano optó por ampliar las importaciones de arroz de Estados Unidos y continúa sin formular una estrategia para garantizar la seguridad alimentaria del país “más pobre del hemisferio...”.

**Fuente: Otramérica**

## **HONDURAS**

### **COMISIÓN DE VERDAD: “EL GOLPISMO CONTINÚA Y ES POSIBLE QUE SE AGRAVE EN EL MARCO DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES”**

La coordinadora de la Comisión de Verdad, la religiosa ecuatoriana Elsie Monge, advirtió durante la presentación del Informe que contiene una investigación sobre la situación del golpe de estado de 2009 y las graves violaciones a los derechos humanos, que el golpismo continúa y que podría agravarse en el proceso electoral hondureño, lo que puede interpretarse que la persecución y asesinatos por razones políticas seguirán su curso con consecuencias para el Estado de Honduras.

“Nos preocupa lo que viene en el futuro inmediato, es posible que se agrave en el marco de las próximas elecciones”, dijo Monge.

Para el caso en el Informe divulgado en junio de 2012, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos en Honduras se documentaron desde el mes de junio de 2009, 143 asesinatos por razones políticas que incluyeron persecuciones intensivas para impedir la naciente colectividad resistente, asfixiar a las bases sociales y atacar sus estructuras organizativas.

Este accionar también provocó el desplazamiento de familias que sufrieron una feroz persecución y el exilio de al menos 160 personas, entre ellas de la escritora Helen Umaña y del sacerdote diocesano Fausto Milla (ambos integrantes de la Comisión de Verdad) así como de una asistente del padre Milla.

En el tema de los asesinatos políticos el Cofadeh informó que durante el 2012, siete ciudadanos de la resistencia popular y del partido LIBRE fueron asesinados. Estos crímenes políticos han sido caracterizados por una forma reiterada, organizada y coordinada fundamentalmente a través del aparato político-militar del estado, con colaboración activa o pasiva de los demás poderes, especialmente del judicial y la actividad del legislativo en la emisión de leyes que restringen derechos.

Por otro lado, los ejes de documentación más importantes del informe de la Comisión de Verdad abarcan los registros de numerosos testimonios de las víctimas y familiares, la necesidad imperiosa de reparación integral que el Estado deberá cumplir por el rompimiento del tejido social y el tema de la impunidad, como la carcoma que impide que se investigue, procese y condene a los autores intelectuales y materiales de las numerosas violaciones a los derechos humanos.

“Mientras no se haga una investigación y sanción a los responsables del golpe, tanto civiles como militares es prácticamente imposible avanzar en el clamor de justicia de las víctimas”, apuntó Monge quien por 35 años ha servido como misionera de la congregación Hermanas de Maryknoll en su país natal Ecuador y es una reconocida defensora de derechos humanos.

El mayor número de denuncias registradas en el Informe de la Comisión de Verdad se refieren a derechos civiles y políticos, solo en violaciones en derecho a la integridad representan unos mil 619 casos (un 30 por ciento de todas las violaciones documentadas).

El otro gran rubro de violaciones a derechos humanos contenido en el Informe se refiere a la libertad de reunión y asociación (13 por ciento), o sea que más de la mitad de las denuncias recibidas son

por el derecho a la integridad física y emocional (asesinatos, torturas, maltratos, vejaciones) y al derecho a la libertad que tiene la ciudadanía para reunirse y asociarse.

Sin embargo el total de denuncias del informe tiene más de 5 mil violaciones a derechos humanos, "que es un número inaceptable", subrayó Monge.

El documento presentado el miércoles 3 de octubre a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional en la sede del Colegio Profesional Superación Magisterial (Colprosumah) registra múltiples crímenes de lesa humanidad porque comprenden, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, entre otros, que afectan a la humanidad en su conjunto y por tanto son delitos que no prescriben.

"En torno a la reparación integral de las víctimas, porque después de tanto atropello no puede ser que se diga que aquí no ha pasado nada, las víctimas tienen todo el derecho de una reparación integral, no solo las personas victimizadas y sus familiares, porque las violaciones de derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado, también afecta a la sociedad, porque se rompe el tejido social, explicó Elsie Monge.

Monge señaló que esa reparación tiene que ver con recomponer a la sociedad que ha sido afectada. "La comisión plantea que se hagan cambios institucionales y estructurales que apunten al nunca más, a no continuar con esta tragedia en el pueblo hondureño".

Como señala el escritor Eduardo Galeano, la experiencia indica que es la ausencia, la amnesia, la que hace que la historia se repita y que se repita como una pesadilla; en ese sentido la recuperación del pasado sirve para la transformación de la vida presente, que es lo que hemos estado haciendo, dijo Monge.

Agregó que en Honduras se está construyendo un escenario de cambio político, el cual constituye una oportunidad para que la sociedad los implemente, y ante esta iniciativa es importante recalcar la importancia de la juventud, quienes pueden aportar con todo su vigor su idealismo, su compromiso, pero también las nuevas generaciones necesitan conocer las raíces históricas de las luchas presentes, saber cómo se ha ido construyendo el país y distribuyendo sus riquezas.

Monge indicó que este conocimiento fortalecerá el compromiso y reforzará la demanda de justicia. El Informe de la Comisión de Verdad tiene una visión de derechos que implica a las víctimas como la razón de ser de esta investigación, la cual está centrada alrededor de 3 grandes ejes: Primero el papel del Estado en el golpe, qué significa ese golpe de estado, sus causas y sus consecuencias.

En segundo lugar el registro de las violaciones a los derechos humanos, el testimonio de las personas victimizadas y en tercer lugar el tema de la impunidad, como una forma de negación de verdad y justicia en los hechos denunciados.

Lamentablemente el golpismo continúa y es posible que se agrave, advirtió Monge en alusión a que la persecución y asesinatos por razones políticas se sigan presentando en Honduras en el marco del presente proceso electoral.

**Informa: Marvin Palacios**

## **MÉXICO**

### **REPORTA PADRE SOLALINDE PLAGIO DE 40 MIGRANTES EN MEDIAS AGUAS, VERACRUZ**

El sacerdote católico Alejandro Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino, denunció un secuestro masivo de 40 migrantes centroamericanos en la localidad de Medias Aguas, en el estado de Veracruz hace tres días, en el que estarían implicados integrantes de *Los Zetas*.

En entrevista radiofónica señaló que el propósito de secuestro de los migrantes es para exigir dinero a sus familias por el rescate, pero en dado caso de no conseguirlo de manera rápida, les quitan todo lo que traen.

El sacerdote explicó que la información la recibió de una de las víctimas que logró escapar luego que los plagiarios lo abandonaran al pensar que había fallecido tras golpearlo con un machete en la cabeza.

El sobreviviente relató que los secuestradores viajaban a bordo de varias camionetas.

**Tomado de La Jornada**

## **NICARAGUA**

### **GOBIERNO SUBE GASTO SOCIAL EN 2013**

El gobierno anunció que en 2013 incrementará el gasto social con programas de fuerte impacto entre la población nicaragüense como "Hambre Cero", "Usura Cero", "Plan Techo" y el "Bono Productivo".

La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, aseguró este miércoles que desde los concejos municipales se profundizará el próximo año "el poder de las personas, de las familias y la comunidad", con la continuación mejorada de los programas sociales que impulsa el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Durante su comparecencia a través del canal 4 de televisión, Murillo sostuvo que el programa de micro crédito, "Usura Cero" se incrementará en 18% para unos 100 mil nuevos créditos por un monto aproximado de US\$22 millones, en beneficio de mujeres responsables de micro y pequeños negocios.

La dirigente aseguró "que Nicaragua continúa avanzando en los procesos de restitución de derechos, y las familias, en unidad, se están apropiando de los espacios políticos, sociales y económicos que se han abierto en el país, asimilando que la unidad es la clave del éxito".

En cuanto al Bono Productivo Alimentario, informó que en 2013 se atenderá a 25 mil nuevas mujeres y familias organizadas.

Aseguró que con el programa "Patio Saludable" se atenderá a 75.000 familias el próximo año. Murillo recordó que con ese programa se distribuyen semillas, plantas y árboles frutales que permiten a las familias desarrollar sus propios huertos, cultivar sus propios vegetales, sus frutas y mejorar la nutrición en su hogar para su familia.

Sobre la entrega de los "Bonos Ambientales", cuyo objetivo es proteger a la Madre Tierra y restaurar el equilibrio, manifestó que se atenderá a 50.000 familias en todo el país y se incrementarán, en general, todos los programas sociales ejecutados por el gobierno, entre otros, entregas de cocinas de gas y paquetes alimentarios.

### **Crecerá matrícula escolar**

La matrícula escolar tendrá en el 2013, un crecimiento del 2%, es decir, pasará de 1 millón 648 mil 500 este año a 1 millón 673 mil 650, expresó Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

En primaria el incremento andará por el 2%, pasando de 902 mil 790 a 921 mil 435 el próximo año. La matrícula secundaria, por su parte se mantiene similar a la del 2012 en 504 mil 541 estudiantes.

En cuanto a la alfabetización, la dirigente aseguró que estarán trabajando con 237 mil 690 jóvenes y adultos para un incremento del 43% en relación al presente año.

Los paquetes educativos solidarios a entregarse también tendrán un aumento. Estos pasarán de 250 mil a 300 mil nuevos paquetes, para un incremento del 20%.

Murillo aseveró que la merienda escolar llegará a beneficiar a 1 millón 50 mil estudiantes, para subir un 5% si se considera que en 2012 se han visto beneficiados 1 millón 306 estudiantes. Con esto se cubre el 100% de la matrícula de pre-escolares y colegios de primaria públicos y subvencionados del país.



Finalmente afirmó también que 1 mil 253 centros de estudios serán rehabilitados, ampliados o reparados, mejorando 5 mil 630 ambientes escolares. Igualmente se entregarán 180 mil pupitres a escuelas públicas, de los cuales 120 mil son reparados y 60 mil nuevos.

Tomado de La Gente, Radio La Primerísima

## PANAMÁ

### **GOBIERNO DE PANAMÁ ADMITE INSTALACIÓN DE NUEVAS BASES MILITARES**

El ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, confirmó la construcción y señaló que forma parte de las cuatro bases aeronavales nuevas, que según la autoridad, no estaban incluidas en el plan original de ampliación de esa rama.

El Gobierno panameño admitió que instalará una base aeronaval en la isla Flamenco con acceso por el Pacífico al Canal de Panamá, tras haberlo negado durante un tiempo. Según cálculos de especialistas en bienes y raíces, su precio ronda los 4 mil dólares por metro cuadrado.

El ministro panameño de Seguridad, José Raúl Mulino, confirmó la construcción y señaló que forma parte de las cuatro bases aeronavales nuevas, que según la autoridad, no estaban incluidas en el plan original de ampliación de esa rama.

Las otras tres bases se construirán en Chinina, distrito de Chepo (centro), en Tonosí (sureste) y en la comarca Nganbe Buglé (oeste).

Anteriormente, Mulino había dicho que lo que se construía en la isla Flamenco era un dique seco "para subir y bajar lanchas patrulleras". Según el titular de la cartera de Seguridad panameña, la nueva base militar servirá de estación sede del Servicio Nacional Aeronaval en el área del Pacífico. "Con esto lo que pretendemos es evitar, como en efecto se está haciendo, que el flujo de droga entre a Panamá", argumentó Mulino.

Panamá tiene en total 18 bases aeronavales en las que el Ejecutivo ha invertido 134 millones 786 mil dólares.

Organizaciones sociales como el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadesco) ha reiterado en varias oportunidades que detrás de la instalación de bases aeronavales en la nación, existe información oculta relacionada con el posible uso de estas estructuras por parte del Ejército de Estados Unidos.

En octubre de 2009, la Casa Blanca había acordado la instalación de dos bases navales en la nación centroamericana. En ese entonces, el ministro Mulino había declarado que él propuso crear estaciones navales con una fuerza de tarea conjunta con Washington "netamente panameña".

Informa: <http://www.kaosenlared.net/>

## VENEZUELA

### **CINCO CONCLUSIONES DE LAS ELECCIONES DE VENEZUELA**

1.- Venezuela es una auténtica democracia El país caribeño ha vuelto a demostrar que es una de las democracias más sólidas de Latinoamérica. Las elecciones han sido limpias y transparentes, con una participación del 80%, impensable en otras latitudes. Este elevadísimo índice es más sorprendente aún si se tiene en cuenta que desde 1998, año en el que Chávez accedió a la Presidencia, el pueblo ha sido llamado 15 veces a las urnas.

2.- Los medios de comunicación han quedado deslegitimados La prensa internacional, con El País y ABC a la cabeza, han manipulado la información para presentar a la derecha como una opción vencedora frente a un Chávez abandonado por el pueblo y que sólo se mantendría gracias al uso abusivo del poder institucional. Amparándose en el desconocimiento de su audiencia sobre la

realidad de Venezuela, no han dudado en informar sólo de las encuestas que daban como ganador a Capriles, entrevistar únicamente a opositores, presentar a destacados antichavistas como supuestos analistas imparciales o tergiversar datos y hechos. De nuevo, los medios de comunicación de masas han incumplido su principal obligación y razón de ser que es garantizar el Derecho a la Información de la ciudadanía (consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Por eso, la prensa es percibida como uno de los principales problemas del Estado español, según las encuestas.

3.- El pueblo apoya a Chávez. El presidente mantiene un respaldo mayoritario. Ganar por diez puntos tras 14 años en el poder está al alcance de muy pocos mandatarios. Los resultados demuestran que el electorado venezolano no comparte la grotesca caricatura que las terminales mediáticas y políticas del neoliberalismo hacen del líder bolivariano. La conexión entre Chávez y el pueblo se sustenta en los avances de estos años. El cumplimiento de lo prometido es lo que le permitió el pasado jueves, ante más de un millón de personas, decir “Yo nunca les he fallado; yo nunca les he mentado” y que sonara creíble.

4.- Los ataques continuarán Las primeras declaraciones ante el triunfo de Chávez anuncian que se mantendrá el acoso. Continuará el hostigamiento, las difamaciones, las críticas de trazo grueso y los chantajes políticos y económicos. Una vez más, las supuestas democracias avanzadas no respetan la decisión de los pueblos cuando creen que ésta va en contra de sus intereses.

5.- Hay alternativas Venezuela es la prueba de que otro modelo es posible. Sus logros son incontestables: 5,6 de crecimiento del PIB; descenso a la mitad del desempleo, que ha pasado del 15% de 1998 a un 7% en la actualidad y continúa bajando; erradicación del hambre y el analfabetismo; disminución de la pobreza del 27% AL 6% y de la pobreza extrema del 25% al 7%; quinto país del mundo en tasa de matriculación universitaria; extensión de la sanidad universal y gratuita... Otros transitan ya la misma senda, con mayor o menor similitud: Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Honduras (en estos dos últimos países el neoliberalismo no dudó en derrocar mediante golpes de estado a los gobiernos legítimamente elegidos). Latinoamérica es hoy la última trinchera frente al dogma de los recortes, las privatizaciones y la supresión de derechos. Las clases populares europeas harían bien en mirarse en este espejo.

**Alejandro Fierro, periodista y colaborador de la Fundación CEPS**